

**CAUSA ROL N° : C-293-2019**  
**MATERIA : INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS**  
**CÓDIGO : I03A**  
**DEMANDANTE : CHANG RIVERA, MARIO SERGIO**  
**DEMANDADO : AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.**  
**FECHA INICIO : 07 / 02 / 2019**

**Arica, seis de agosto de dos mil veinte.**

**VISTOS:**

Con fecha 07 de febrero de 2019, en folio 1, compareció el abogado Rodrigo Leonardo Muñoz Ponce, domiciliado en calle Arturo Prat N° 391, Edificio Empressarial, oficina 92, de Arica, en representación de don Mario Sergio Chang Rivera, comerciante, con domicilio en pasaje El Olivar N° 3040, Loteo Montalvo, de Arica y dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la empresa Aguas del Altiplano S.A., representada legalmente por don Christian Barahona Rubio, ambos con domicilio en calle Bolognesi N° 290, de Arica, solicitando que en definitiva sea condenada a pagar a su representado las indemnizaciones de perjuicios que se señala, por los daños causados al inmueble de propiedad de su representado, ubicado en el Valle de Azapa, sector Pago de Gómez, kilómetro 1.5, de Arica.

Señala que su representado es dueño del predio agrícola denominado Lote B-1, de una cabida de 1,46 hectáreas, de la subdivisión del lote B, de la subdivisión del Lote N° 1, del predio agrícola ubicado en el Valle de Azapa, Km. 1.5 de Arica, individualizado en el plano archivado bajo el N° 71, del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica correspondiente al año 2003, cuyos deslindes son: NORTE: parcelas N° 5-A-2, rol de avalúo 3401-70 de don Francisco Álvarez González y parcela 5-A-3, rol de avalúo 3401-71 de don Alfonso Cuadrado Kaiser, con ambos separados por muro en 103,50 metros y con camino público Campo Verde en 6,00 metros y propiedad de don Pedro Crignola Riccardi y otros, separados por cerco en 3,00 metros; ESTE: Propiedades de don Pedro Crignola Riccardi y otros, rol de avalúo número 3400-285, separado por cerco en 75,00 metros y de don Andrés Véliz Ramos, rol de avalúo número 3400-13, separado por cerco en 63,00 metros; SUR: propiedades de don Andrés Véliz Ramos, rol de avalúo número 3400-13, separado por línea estacada en 3,00 metros y propiedades de doña Ana María Lombardi Arata, rol de avalúo número 3400-32: doña Susana Abdo Jorrat, rol de avalúo número 3400-61 y don Bonifacio Cáceres Roque, rol de avalúo número 3400-77, con todos separados por



muro en parcialidades de 59,00 metros; 25,30 metros y 25,50 metros respectivamente; OESTE: propiedades de doña Susana Abdo Jorrat, rol de avalúo número 3400-61, separado por muro en 6,00 metros; don Bonifacio Cáceres Roque, rol de avalúo número 3400-77, separado por muro en 40,40 metros y lote B-2 de esta subdivisión, separado por línea recta estacada en 97,00 metros.

Indica que adquirió la señalada propiedad por compra que hizo a don Mario Ignacio Chang Alvarado, su padre, conforme a escritura pública otorgada ante el notario público de Arica, Sr. Víctor Warner Sarria, con fecha 08 de marzo de 2013 y que el inmueble se encuentra inscrito a fojas 968 N° 784 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Arica.

En cuanto a las vías de acceso al inmueble, refiere que se ingresa desde el camino público o ruta A-27 que va desde Arica a Ausipar, a la altura del Km 1,5. y desde allí, se accede a través de un camino privado abierto por su representado, como puede apreciarse en el plano archivado bajo el N° 71 del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica correspondiente al año 2003.

Como hecho ilícito indica que a partir del 10 de febrero de 2017, la empresa demandada, a través de su contratista, llegó al terreno de su representado, a fin de proceder a realizar obras correspondientes a la instalación de tuberías y alcantarillado en el subsuelo para el curso de agua potable dirigido a la población Campo Verde desde el Sector Pago de Gómez, trabajos que asegura, se ejecutaron en la propiedad de su representado, en su deslinde Este, sin su consentimiento hasta su finalización ocurrida aproximadamente a 20 días desde su inicio.

Afirma que pese a los reclamos de su representado, se consumaron los daños en su propiedad tales como excavaciones, ruidos molestos, instalación de cercas, ingreso de trabajadores, polvo levantado, sin que existiera acuerdo en la realización de tales trabajos y sin que mediare indemnización alguna, ni mucho menos la constitución de una servidumbre de acueducto que autorizara estos trabajos o resolución judicial o acto de autoridad que lo dispusiere. puntualizando que hasta hoy el demandado aprovecha el terreno de propiedad de su representado, para el curso de agua potable por medio de las tuberías instaladas debajo de su inmueble para beneficio de las población de Campo Verde.

En cuanto al derecho señala que la indemnización que exige tiene su fundamento en la responsabilidad extracontractual, esto es, aquella que deriva de la relación genérica de los miembros de la sociedad que exige a todos el deber de no causar daño a otro, llamada también delictual y cuasidelictual o aquiliana, precisando que en el caso concreto, ha habido culpa en el proceder de la demandada, al infringir la



Ley General de Servicios Sanitarios, contenida en el D.F.L N° 382 y su reglamento, asegurando que de conformidad a su normativa, la demandada previo a ejecutar obras de alcantarillado, cañerías o tuberías, debió efectuar los procedimientos necesarios para constituir una servidumbre de acueducto, la que además requería del pago de una indemnización de perjuicios, conforme a las normas del Código de Aguas.

Asegura el demandante que la demandada derechamente procedió a ejecutar las obras, asumiendo –probablemente- que los trabajos que se estaban realizando, se ejecutaban en un camino público, lo que no era efectivo por cuanto el inmueble de su mandante, comprende el camino que une la población Campo Verde con la Ruta A-27 de Azapa, camino que afirma es de carácter privado y que es utilizado por vehículos que transitan de un lado a otro por mera tolerancia de su representado.

Indica que la demandada tiene una vasta experiencia en la materia y por tanto debió efectuar las respectivas averiguaciones en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, a fin de analizar los títulos de dominio existentes en el sector y el plano archivado bajo el N° 71 del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2003, y antes de realizar aquellos trabajos propios de una servidumbre de acueducto, constituir la previamente, o solicitar las respectivas autorizaciones para hacer los trabajos en su propiedad, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Señala en cuanto al cumplimiento de los requisitos para que un hecho u omisión dé lugar a la responsabilidad cuasidelictual civil, que la demandada, como persona jurídica civilmente capaz, y conocedora de las normas legales y como titular de un importante número de servidumbres activas, con vasta experiencia en su rubro, ejecutó trabajos sin acto o resolución judicial o administrativa que lo autorizase, en un terreno de propiedad privada de su representado. existiendo una clara relación de causalidad entre el ilícito de la demandada y el daño sufrido por su representado en su propiedad.

Respecto a la evaluación de los perjuicios, alega como daño emergente, los daños materiales efectivamente causados en el inmueble, a lo largo de todo el trazado en la suma de \$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), mencionando al efecto, que la extensión es de 138 metros aproximadamente, haciéndose el trabajo con una profundidad de 1,5 a 2 metros, siendo la tubería de un ancho de 40 cm. aproximadamente.

A lo anterior, agrega que para su representado el tener una infraestructura debajo de su propiedad por siempre o mientras sea de su dominio, implica soportar una serie de gravámenes: por una parte, cada vez que ocurran desperfectos o sea necesaria la mantención de las tuberías, instaladas por razones de utilidad pública para transportar agua potable a las poblaciones de Campo Verde, deberá dejar pasar en



terrenos de su propiedad al personal de Aguas del Altiplano S.A. o a sus contratistas, para efectuar los trabajos, con los riesgos que aquello implica para las demás construcciones y plantaciones que tiene en su inmueble; además, en caso de una transferencia del terreno, su representado deberá venderlo con el referido gravamen, disminuyendo claramente su valor, por lo que estima estas circunstancias que afirma constituyen efectos patrimoniales negativos en el valor del inmueble y deben ser considerados al momento de determinar la indemnización de perjuicios.

Refiere que para determinar y regular la indemnización de perjuicios, el artículo 82 del Código de Aguas, establece la forma de determinación de la indemnización que procede en la constitución de una servidumbre de acueducto, mencionando tras citar la aludida norma, que sin perjuicio de que no existe servidumbre de acueducto constituida sobre el predio de su representado, la norma señalada, sirve a modo referencial para evaluar los perjuicios ocasionados por Aguas del Altiplano S.A. en las construcciones hechas en el inmueble de don Mario Chang Rivera, comprendiendo la indemnización que se exige por concepto de daño emergente, todo el terreno ocupado por las tuberías y cañerías instaladas y el de un espacio a cada uno de los costados que no puede ser inferior al cincuenta por ciento del ancho del canal, con un mínimo de un metro de anchura en toda la extensión de su curso, pudiendo ser mayor por convenio de las partes o disposición del juez, cuando las circunstancias lo exigieren (por ejemplo, contener los escombros de la construcción y las limpiezas posteriores).

Agrega que la indemnización de perjuicios que se establezca, debe tener también un carácter punitivo y disuasivo, para evitar conductas semejantes hacia el futuro.

Como daño moral indica que este se configura en la impotencia y molestias ocasionados a su representado por ver que la tranquilidad de su hogar y su derecho de dominio sobre el inmueble, fueran vulnerados por el proceder de Aguas del Altiplano S.A., por lo que estima este se avalúa en la suma de \$ 15.000.000.- (quince millones de pesos) o la que estime procedente el Tribunal, considerando la proporción del mismo al daño patrimonial efectivamente causado y el tiempo que duró la vulneración con los trabajos realizados, y el gravamen que desde el año 2017, ha debido soportar gratuitamente y sin ninguna acción de reparación por parte de la demandada.

Hace presente, que debe tenerse especialmente consideración el hecho de que Aguas del Altiplano S.A., sin perjuicio de ser una empresa privada en su constitución, actúa en representación de ECCONSA CHILE S.A., y por tanto, actúa con las prerrogativas propias de una empresa pública.



Por ultimo pide se ordene la desinstalación de las tuberías que atraviesan el predio de su representado, puesto que afirma, se trata de una obra efectuada sin el consentimiento de este último y nada puede obligarlo a soportar un gravamen de tal naturaleza que no tiene resolución judicial, contrato o acto administrativo válido que lo constituyera o autorizase en el sector y que fuera informado a su representado, sin que tampoco existiera indemnización concedida en su para ejecutar tal obra.

Finalmente, pide se acoja su demanda y en definitiva se declare que Aguas del Altiplano S.A. es responsable civilmente por los daños y perjuicios ocasionados en el inmueble de propiedad de don Mario Sergio Chang Rivera, ubicado en el Valle de Azapa, Km. 1.5 de Arica, individualizado en el plano archivado bajo el N° 71, del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica correspondiente al año 2003, e inscrito a fojas 968 N° 784 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, y en consecuencia se condene a Aguas del Altiplano S.A. al pago de la suma de \$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño emergente, y \$ 15.000.000.- (quince millones de pesos) por concepto de daño moral o la suma que se estime procedente, en favor de su representado, Mario Sergio Chang Rivera, más los intereses y reajustes que conforme a la variación del IPC, experimenten las sumas antes dichas.

Pide ademas, que se desintalen las tuberías y cañerías que atraviesan el predio de don Mario Sergio Chang Rivera, en toda su extensión, debiendo inhabilitarse para tal efecto, condenandose a su vez en costas a Aguas del Altiplano S.A.

Con fecha 28 de mayo de 2019, en folio 11, se notificó a don Christian Barahona Rubio, en representación de Aguas del Altiplano S.A, de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Que, con fecha 08 de julio de 2019, en folio 16, el abogado don Carlos Ruiz Larral, en representación de la parte demandada, Aguas del Altiplano S.A. solicita el total e íntegro rechazo, con expresa condena en costas.

Opone en síntesis las siguientes alegaciones o defensas: que existen inconsistencias jurídicas de la demanda; defensa negativa; que no hay responsabilidad civil extracontractual de Aguas del Altiplano; que los daños alegados por el actor son improcedentes y por tanto no son indemnizables; falta de legitimación activa del actor; y en subsidio, que el monto de la demanda debe ser sustancialmente reducido porque existió una exposición imprudente por parte de la víctima.

En cuanto a las inconsistencias juridicas de la demanda, sostiene que el primer defecto de la demanda de autos, es que ésta se funda en un hecho ocurrido a partir de febrero del año 2017, fecha en que la empresa demandada, a través de su contratista,



habría procedido a la instalación de tuberías y alcantarillado en el subsuelo del terreno del actor ubicado en su deslinde Este, precisando a este respecto, que la matriz de agua potable que une la población o comunidad Campo Verde con la Ruta A-27, que pasa por el camino de uso público, data del mes de junio de 2002, en los tiempos de ESSAT. S.A., teniendo dicho camino el mismo trazado desde esa época, - lo que constaría en los planos existente en el Servicios de Impuestos Internos, Dirección de Vialidad y Dirección de Obras Municipales-, lo que se hizo para cumplir con el servicio público de distribución de agua potable, exigidas por la urbanización conforme a la ley, según la obligación que emana de los artículos 5°, 33° y 35° del D.F.L N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, de 1989.

Afirma que la demandada es titular del derecho de explotación de las concesiones sanitarias de producción y distribución de aguas potable y de recolección y disposición de aguas servidas en un conjunto de localidades de las Regiones de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá, en virtud del contrato de transferencia del Derecho de Explotación de Concesiones Sanitarias, suscrito con fecha 30 de agosto de 2004, entre la empresa Aguas del Altiplano S.A., y la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A., hoy “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.” ECONSSA Chile S.A., otorgado por escritura pública ante Notario de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández.

Por lo anterior, afirma que la demandada mantuvo sobre la infraestructura sanitaria, del dominio del Fisco o de otro servicio público, según lo prescrito en el artículo 6 de la ley N° 18.885, que señala: "Los bienes muebles e inmuebles, incluidas las redes de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, que integren el patrimonio del Servicio Nacional de Obras Sanitarias en virtud del decreto ley N° 2.050 de 1977, o que dicha entidad actualmente usa o explota, no obstante pertenecer al dominio del Fisco o de otro servicio público integrante de la administración del Estado, se traspasarán en dominio, por el solo ministerio de la ley, a la respectiva sociedad anónima sucesora legal de cada una de las direcciones regionales, a partir de la fecha indicada en el artículo 3". Es decir, que a la fecha de adquisición de la propiedad por parte del actor, el 08 de marzo de 2013, ya existían las redes públicas de distribución de agua potable, definidas por la letra e) del artículo 53° del D.F.L N° 382, de 1989, como “aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, inclusive los arranques de agua potable operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución, a las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable”.





Aclara que, para cumplir con la obligación legal y su plan de Inversiones, la demandada, licitó el 06 de diciembre de 2016, el contrato ID 3556, a la empresa contratista Ingeniería y Comercial Mannheim Limitada, el proyecto denominado “Refuerzo Campo Verde”, que consistió en la instalación de una Tubería HDPE PE 100 PN 10 con franja azul, DN 250mm, que vino a reforzar la Tubería HDPE PE 100 PN 10 con franja azul, DN 160 mm, existente en el camino de uso público, que une la población o comunidad Campo Verde con la Ruta A-27, ello por cuanto se produjo la necesidad de aumentar las presiones en las redes de agua potable del sector, afectadas por el aumento exponencial de los residentes de la población Campo Verde, derivado de los distintos proyectos de parcelación y sub división que afectaron a dicha población.

Luego señala que como efecto de lo anterior y para conectar el refuerzo instalado en la red pública de agua potable, se realizó un corte programado del suministro de agua potable de una extensión desde las 15:00 horas a las 24:00 horas del día 02 de mayo de 2017 y desde el día 25 de mayo de 2017 a las 05:00 horas del día 26 de mayo de 2017.

A su juicio no es posible que el actor funde su acción sobre la base de hechos que estima incompletos por cuanto, afirma que desde el mes de junio de 2002, la demandada y sus antecesoras legales han operado las redes de la población Campo Verde, cuya área geográfica delimitada en extensión territorial y cota, pertenecen al territorio operacional donde existe la obligatoriedad de servicio para las concesionarias de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, en cumplimiento del artículo 7º, 8º, 9º y 9º bis del D.F.L. N° 382/89, que otorga la concesión para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, concesionaria que debe cumplir con un contrato de concesión de servicio público de carácter administrativo, regido por normas de orden público, suscrito por la Administración a través del Ministerio de Obras Públicas y la sociedad anónima Empresa Aguas del Altiplano S.A., del año 2004, y cuya fiscalización corresponde, en su caso, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios; a la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otros entes fiscalizadores.

Explica que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 7º, 8º, 9º y 9º bis del D.F.L. N° 382/89, la demandada debió cumplir con un imperativo legal de asegurar que las instalaciones que proveen el suministro de agua en los sectores de Campo Verde, se hubieren construido o se instalen en bienes nacionales de uso público, conforme a la ley de concesión o en caminos de uso público sobre los cuales pueden constituirse servidumbres de acueducto legales continuas e inaparentes “en favor de un



pueblo que las haya menester para el servicio doméstico de los habitantes”, según lo disponen los artículos 861 y 879 del Código Civil.

Concordante con lo anterior, refiere respecto al camino de uso público existente en el deslinde Este de la propiedad del actor, que la Memoria Explicativa del Lote B de la Subdivisión Lote N°1 Predio denominado “Domingo Montalvo” Valle de Azapa de agosto de 2003, que ampara el Plano archivado bajo el N°71 del Conservador de Arica, de fecha 04 de diciembre de 2003, consta la existencia de un camino servidumbre de tránsito que une el camino público de la ruta A-27 camino Azapa, con el camino público campo Verde, el que atraviesa las propiedades de doña Ana Lombardi Arata, Andrés Veliz Ramos, Pedro Crignola y Otros y el del actor, accediendo la propiedad del actor – Lote B-1- directamente al camino público Campo Verde, lo que es coherente con la calificación de camino de uso público, y no de camino particular, cuya propia definición contenida en el artículo 1° del Decreto 2190, de 1930, Reglamento de la Ley General de Caminos, señala que “son los construidos a expensas de personas particulares en tierras que les pertenecen aunque los dueños permitan su uso y goce a todos”.

En el mismo sentido señala en cuanto a la clasificación de los caminos, que son caminos públicos los que se indican en el artículo 24 del D.F.L. N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del Decreto con Fuerza de Ley 206, de 1960, de lo que se desprende que todos aquellos que no se encuentren en esta disposición es posible considerarlos como privados. Sin embargo, esta norma contiene algunas excepciones, como lo son las calles o avenidas que unan caminos públicos y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de terrenos transferidos a particulares. Por último, en el artículo 26 se contiene una presunción respecto de caminos que hayan estado en "uso público".

Explica que los caminos se pueden clasificar en caminos públicos, caminos privados y caminos de uso público, con las excepciones ya mencionadas respecto al primer grupo. En cuanto a los caminos de uso público, pueden considerarse los caminos de carácter privado que unan caminos públicos o que hubieren estado en uso público, situación que ocurre en la especie, por cuanto como se dijo, es un hecho público y notorio la existencia del camino de antigua data que cruza varias propiedades, entre los cuales está la del recurrente y que son utilizados para el libre tránsito de personas y vehículos en general, lo cual esta ratificado por el plano de subdivisión de Loteo citado por la actora en su demanda y la data de la tubería de agua potable desde el año 2002, lo que hace presumir que el camino es de uso público. Así, el Título III, de los caminos públicos, en el párrafo I, del D.F.L. N° 850, de 1997, en sus artículos 24 y 25 define y clasifica los caminos públicos, pero el artículo 26 contempla que "Todo





camino que esté o hubiere estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de haber sido cerrado o modificado, cualquiera que sea el tiempo durante el cual el camino haya permanecido total o parcialmente sustraído al uso público".

En síntesis, argumenta que el actor omite deliberadamente que la instalación de la tubería de agua potable en el subsuelo del eje central del camino de uso público que une el camino público Campo Verde con el camino público A- 27 de Azapa, destinado a proveer el servicio de agua potable a la población o comunidad Campo Verde, data del mes de junio de 2002, en adelante, y que incluso la data de la instalación de la infraestructura sanitaria en el camino de uso público es anterior a la fecha de adquisición de la propiedad del actor, quien adquirió la propiedad por compra que le hizo a su padre, don Mario Ignacio Chang Alvarado, el año 2013.

Bajo estas circunstancias, manifiesta que el actor no tenía menos que conocer la construcción de dichas obras que datan del mes de junio de 2002, sin que esta se hayan hecho de forma oculta, lo que resulta inverosímil, atendida la magnitud de las mismas, considerando además que los trabajos realizados durante el año 2017, lo fueron para reforzar la matriz de agua potable existente en el sector con el fin de mejorar la presión del agua que se suministra a los residentes del sector para cumplir con la normativa vigente en esta materia prescrita en la letra a), inciso primero, del artículo 11, de la Ley N° 18.902.

Como defensa negativa, expone que teniendo presente que la demanda ha sido planteada bajo las normas de la responsabilidad civil extracontractual, en forma expresa y categórica controvierte y niega todos y cada uno de los hechos fundantes de la misma, expuestos en el libelo, como los montos reclamados, la forma en que se señala habrían sucedido los hechos, las responsabilidades que se le imputan a la demandada, y mucho menos los valores asociados a los supuestos daños, por lo que afirma, corresponde a la parte demandante, en virtud de artículo 1.698 del Código Civil acreditar todos y cada uno de los elementos que configurarían la responsabilidad invocada

Ademas indica que no hay responsabilidad civil extracontractual de Aguas del Altiplano, alegando que no se cumplen sus requisitos, por cuanto la demandada actuó dentro del marco legal que la regula al intervenir un camino de uso público en el reforzamiento de una tubería de agua existente en el lugar, que data del mes de Junio de 2002, y que pasa por el medio del camino a 1,5 metros y 3 metros respectivamente, cuya extensión va desde el camino público A-27 al camino público de Campo Verde,



pudiendo intervenir dicha faja de terreno, que según lo prescrito por el D.F.L. 382 del año 1988 Ley de General de Servicios Sanitarios, artículos N° 9 y 35.

Arguye que artículo 9°Bis del D.F.L. N° 382, que trata sobre las servidumbres legal de alcantarillado domiciliario”, citado por el actor para fundar su demanda, no aplica al caso de autos pues se trata de trabajos de instalación de una red pública agua potable o matriz, y no refieren en ningún caso a instalaciones de red pública de recolección de aguas servidas, ni mucho menos a conexiones de instalaciones domiciliarias de éstas últimas y añade que tampoco aplica, porque técnicamente, el actor ha hecho una distorsionada, antojadiza y errada aplicación de los incisos 3° y 4° del artículo 9° Bis del DFL 382/89, ya que la servidumbre legal de alcantarillado domiciliario, afirma se constituye por el hecho de que un particular, se vea en la necesidad de atravesar con sus redes interiores domiciliarias de alcantarillado un predio colindante para permitir el desagüe gravitacional de sus propias aguas servidas en una red pública de recolección o colector público, lo que no sucedió en la especie.

En relacion a lo anterior, explica que, del tenor del inciso 4° del mismo artículo, surge que el deber de indemnizar los perjuicios, no corresponde el prestador o concesionario de servicios sanitarios, sino que al propio particular que pretende conectar sus redes domiciliarias a la red pública de recolección o colector público.

Explica que es un hecho no discutido, que la demandada es titular de una concesión en la especie para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, siendo titular de un derecho de aprovechamiento de aguas, y la titularidad de ésta de una tubería de agua potable e instalaciones sanitarias anexas, de lo que se sigue su derecho indiscutido a disponer de las referidas aguas y llevarlas desde el camino público A-27 de Azapa, hacia la población o comunidad Campo Verde que carece de ellas, la que tiene su acceso por un camino público.

Agrega al antecedente que al tratarse de agua potable, cuya necesidad para la vida y cualquier actividad humana es indispensable, tratándose de un elemento vital, de modo que el antecesor en el derecho de propiedad del Lote B-1 antes Lote B de la subdivisión del Lote N°1, y los otros propietarios de los terrenos colindantes al camino de uso público, con su mera voluntad y tolerancia permitieron desde el año 2002 a la fecha, la instalación de la tubería de agua potable que por la ley N° 18.885, “se traspasarán en dominio, por el solo ministerio de la ley”, en este sentido, la servidumbre de acueducto tiene el carácter de legal y, en consecuencia, es obligatoria para el demandante, siendo un hecho público y notorio que el camino de uso público por el cual al actor reclama el pago de la indemnización de perjuicios es efectivamente de uso



público, porque allí transitan diariamente personas, circulan vehículos de todo tipo, camiones aljibes de propiedad del actor que vende agua, desde y hacia la población Campo Verde, además de conectar dos caminos públicos la ruta A-27 de Azapa y el de Campo Verde. Máxime si la servidumbre de acueducto legal, puede constituirse partes o por confesión judicial prestada por el propietario del predio sirviente.

indica que el hecho atribuido por el actor no se pueda imputar a la demandada, el contratista de la empresa Aguas del Altiplano S.A. intervino un camino de uso público que conecta el camino A-27 con la población Campo Verde, para reforzar la infraestructura sanitaria existente en el lugar, que data del mes de Junio de 2002, a la fecha.

Alega que los daños invocados por el actor son improcedentes y por tanto no son indemnizables, sin perjuicio deja constancia de que para todos los efectos probatorios que en derecho correspondan, controvierte los daños y perjuicios reclamados, no les constan y por ende niega que éstos hayan existido.

En cuanto al daño material de \$40.000.000 demandado por el actor fundada en lo prescrito en el artículo 82 del Código de Aguas, indica que esta indemnización no se refiere a los gastos de construcción de la tubería de agua, porque tales expensas corresponde a la demandada, sino que tienden a compensar al dueño del predio sirviente por la privación que sufre de la faja de terreno que ocupara el acueducto y las incomodidades que acarrearía la hendedura de su propiedad.

En este sentido, señala que el argumento para demandar el daño material es inconsistente por varios motivos, primero, porque la instalación de la tubería de agua potable, como se dijo, data del mes de junio de 2002, y los trabajos realizados durante el año 2017, fueron para reforzar la tubería existente en el lugar y no la instalación de una primera tubería, en consecuencia ninguna privación ha causado en la propiedad del actor, quien tiene su salida de acceso por la camino Público de Campo Verde que conecta con su Lote B-1, además es de público conocimiento que los camiones aljibes de propiedad del actor transitan normalmente por el camino de uso público. En segundo lugar, indica que el actor confunde el concepto de daño material con el lucro cesante, al afirmar que un probable gravamen sería “que una posterior venta del referido inmueble implicaría percibir un menor valor por el mismo, depreciación que igualmente debe ser considerada en la determinación del daño emergente”, cuestión que por su naturaleza corresponde a un lucro cesante y no a un daño emergente. En tercer lugar, porque el actor solicita la suma señalada sobre una faja de terreno de 138 metros aproximadamente, siendo que el Lote B-1, tiene una cabida de 1,46 hectáreas, equivalente a es decir 14.600 metros cuadrados, lo que llevado a la fórmula que aplica



en su libelo de demanda, es notoriamente excesivo, los 138 metros corresponden a un 0,94% del total del terreno, y si el avalúo fiscal del terreno es de \$3.929.679., al 28 de julio de 2003, la suma da un total de \$37.143., lo que a prima facie es notoriamente excesivo. En cuarto lugar, porque la instalación de la tubería de agua potable que data del mes de Junio de 2002, y su refuerzo del año 2017, no ha producido ningún daño sobre el inmueble, en su propiedad privada y en la tranquilidad de su hogar, en las plantaciones, por cuanto dicha tubería para por medio del camino de uso público, sin que interfiera o cause ruidos molestos o se requiera ingresar a la propiedad del actor para reparar la tubería, toda vez que esta pasa por fuera de la propiedad del actor.

Respecto al daño moral reclamado, por la suma de \$15.000.000., señala que lo funda en la “impotencia y molestias ocasionados al actor por ver que la tranquilidad de su hogar y su derecho de dominio sobre el inmueble, fueran vulnerados por el proceder de Aguas del Altiplano S.A.” y luego agrega que, “el hecho de ejecutar en terrenos del actor obras y construcciones sin su consentimiento ni acto administrativo o judicial que así lo autorizara, constituyen verdaderas vías de hecho y atenta contra el principio de confianza legítima que debe existir entre los entes públicos y sus administrados, confianza que necesariamente debe repararse por este concepto”.

Reclama que la pretensión de pago del actor es exorbitante, si como afirma, no existió daño material, por lo que no existe la posibilidad de acceder al daño moral, en cuanto las instalaciones de la tubería del agua potable subterránea pasa por fuera de la propiedad del actor, sin que se viera interrumpida la tranquilidad del hogar ubicado en el otro extremo del terreno, o sus plantaciones se hayan visto dañadas o afectadas por la existencia del camino o los trabajos de instalación y reforzamiento de la tubería, razón por la cual estima debe ser rechazada la demanda en este capítulo.

Invoca la falta de legitimación activa del actor, señalando que en el registro de Hipotecas y Gravámenes, del título de propiedad del actor, está inscrito un derecho real de usufructo en favor del acreedor, don Mario Ignacio Chang Alvarado y de doña Guillermo Graciela Rivera Cerezo, padres del actor, inscrito a fojas 692 N°230 del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2013, con una data anterior a los trabajos realizados por la demandada en el año 2017 y la fecha de demanda de autos, de 07 de febrero de 2019, por lo que sería el usufructuario quien tiene el derecho de uso y goce y está facultado para percibir los frutos naturales y civiles de la cosa sobre la cual ejerce su derecho real, que en este caso al perseguirse el pago de una cantidad de dinero, ello representa un fruto civil al que tiene derecho a percibir el usufructuario, y no así el nudo propietario, que no se encuentra en la actualidad en posesión de dicha



facultad, y solo conserva la facultad de disponer de la propiedad y en esto se encuentra limitado en su derecho.

Por ultimo indica para el caso de acojerse la demanda, que solicita se rebaje el monto de la indemnización, alegando que sin perjuicio de que Aguas Del Altiplano S.A., no tiene responsabilidad en los hechos materia de autos y que la demanda de autos, a su juicio, debe ser rechazada, hay culpa exclusiva de la víctima, agregando que al menos hubo una exposición imprudente al daño.

En relación con la culpa exclusiva de la víctima, precisa que al autorizar el propietario del Lote B hoy Lote B-1, en el mes de junio de 2002, la instalación de la tubería de matriz de agua potable que conecta por el camino de uso público la ruta A-27 con el camino público de Campo Verde, cualquier trabajo hecho fuera de su propiedad podría causar alguna molestia no sólo a él sino que a todos los dueños de los terrenos colindantes al camino, por trabajos de reparación, cambio de tubería o reforzamiento de la misma.

Sostiene que en la difícil eventualidad de probarse y verificarse por parte del demandante como todos los elementos de la responsabilidad concurren copulativamente, es decir, acción u omisión culpable por parte de Aguas Del Altiplano, que el daño fue causado por Aguas Del Altiplano y la relación de causalidad entre ambas, se estaría en presencia de una clara exposición al daño, tal como se establece en el artículo 2.330 del Código Civil, por tanto cree que en el supuesto de verificarse tales hechos, el Tribunal deberá considerar por mandato de la disposición que se transcribe a pie de página, la restricción en las obligaciones de reparar el daño y rebajar la cantidad demandada y establecida en el petitorio de la primera presentación.

Con fecha 04 de septiembre de 2019, en el folio 39, tuvo lugar la audiencia de conciliación, con la sola asistencia del apoderado de la parte demandada y en la misma, llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, atendida la rebeldía de la parte demandante.

Con fecha 06 de septiembre de 2019 en el folio 40, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 15 de mayo de 2020 en el folio 141, se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha 27 de mayo de 2020 en el folio 147, como medida para mejor resolver, se ordenó cumplir con el peritaje pendiente del perito Raimundo Vargas Nuñez y pedir cuenta al Consejo de Defensa del Estado, respecto del oficio N° 470-2020 de fecha 18 de mayo de 2020, en que se pedia cuenta de oficio N° 048-2020, de fecha 14 de enero de 2020, que solicitaba remitir croquis de expropiación del informe de tasación de expropiación, Resolución Fiscalía Exenta N°737, de fecha 23 de enero de 2013, correspondiente a la causa V-508-2014 de este Segundo Juzgado de Letras de Arica,



teniéndose por cumplida dicha medida, con fecha 25 de junio de 2020, en el folio 157, con la recepción del peritaje remitido por don Raimundo Vargas Nuñez en el folio 152 y del oficio Ord N°357 de fecha 15 de junio de 2020, remitido por el Consejo de Defensa del Estado, en el folio 150.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**I - EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS**

**PRIMERO:** Que, con fecha 11 de enero de 2020, en el folio 66, el apoderado de la parte demandada, junto con formular observaciones, objetó por falta de autenticidad, el documento acompañado por la parte demandante en el folio 55, consistente en la Minuta técnica explicativa del camino de acceso en litigio, elaborado por el ingeniero agrónomo, Carlos Valdera Medina, por tratarse de un documento privado, emanado de tercero y por no constarle a su parte la efectividad de haber sido emitido por quien aparece haciéndolo y no haber sido reconocido en estrados por aquella persona, sin haber comparecido como testigo, por lo cual no le consta su integridad, fecha, autenticidad ni contenido.

**SEGUNDO:** Que, con fecha 17 de enero de 2020, en el folio 79, se tuvo por evacuado en rebeldía el traslado a la objeción documental.

**TERCERO:** Que, tratándose la objeción deducida por la demandada, de una apreciación subjetiva respecto de la forma del documento objetado, y atendido a que el examen y calificación del valor probatorio de los instrumentos aportados corresponde a una prerrogativa del tribunal, la objeción deducida será rechazada.

**II - EN CUANTO A LAS TACHAS:**

**CUARTO:** Que, con fecha 10 de enero de 2020, en folio 64, la parte demandada dedujo respecto del testigo Amador Guillermo García Tabilo, la tacha del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que existiría, de acuerdo al mérito de la respuesta del testigo, una relación de subordinación con el actor, por los trabajos y el pago que éste le realiza, lo cual resta su imparcialidad.

**QUINTO:** Que, la parte demandante, en el mismo folio 64, evacuó traslado respecto de la tacha deducida, solicitando su rechazo, señalando que el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, establece que debe existir una subordinación o dependencia, que en la especie no existe, ya que el testigo no tiene contrato alguno con el demandante y los servicios que presta los realiza según su tiempo y disposición.

**SEXTO:** Que, con fecha 10 de enero de 2020, en folio 64, la parte demandada dedujo en contra del testigo Pedro Beltrán Escobar Fredes, la tacha del artículo 358 N°6





del Código de Procedimiento Civil, señalando que de acuerdo al tenor de su declaración, éste ha señalado expresamente que tiene un interés directo en el pleito, por lo que su testimonio le resta imparcialidad.

**SÉPTIMO:** Que, la parte demandante, en el folio 64, evacuó traslado respecto de la tacha del artículo 358 N°6 del Código de Procedimiento Civil deducida, solicitando su rechazo, señalando que no existe un interés directo del testigo, ya que solo exige que sea un juicio justo para aclarar el derecho del demandante.

**OCTAVO:** Que, con fecha 10 de enero de 2020, en folio 65, la parte demandante opuso en contra del testigo Raúl Ernesto Palma Ponce, la tacha del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, por haber existido subordinación y dependencia, atendida la relación laboral que existía en ese período.

**NOVENO:** Que, la parte demandada, en el mismo folio 65, evacuó traslado respecto de la tacha del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil deducida, fundando su oposición en la disposición legal citada, por cuanto dicha inhabilidad está referida a los trabajadores dependientes de la persona que exige su testimonio. Indica que tal situación no se produce en la especie, porque al tenor de lo declarado por el testigo, en la actualidad trabaja para un organismo del Estado, y como tal esta causal no aplica a un funcionario público, por lo que solicita que sea rechazada la tacha formulada, por carecer de fundamento alguno, siendo el testigo hábil para declarar en el juicio.

**DÉCIMO:** Que no habiéndose acreditado respecto de los testigos Amador Guillermo García Tabilo y Raúl Ernesto Palma Ponce, la existencia de un vínculo de subordinación o dependencia con las partes que los presentaron a declarar, y respecto del testigo Pedro Beltrán Escobar Fredes, por no haberse probado la existencia de un interés que sea de indole patrimonial, todas tachas deducidas serán rechazadas, como se dirá en lo resolutive.

### **III - EN CUANTO AL FONDO:**

**UNDÉCIMO:** Que el abogado Rodrigo Leonardo Muñoz Ponce, en representación de don Mario Sergio Chang Rivera dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la empresa Aguas del Altiplano S.A., representada legalmente por don Christian Barahona Rubio, solicitando las indemnizaciones de perjuicios que se señala, por los daños causados al inmueble de propiedad de su representado, ubicado en el Valle de Azapa, sector Pago de Gómez, kilómetro 1.5, de Arica.



Señala que su representado es dueño del predio agrícola denominado Lote B-1, de una cabida de 1,46 hectáreas, de la subdivisión del lote B, de la subdivisión del Lote N° 1, del predio agrícola ubicado en el Valle de Azapa, Km. 1.5 de Arica, el que adquirió por compra que hizo a don Mario Ignacio Chang Alvarado, su padre, con fecha 08 de marzo de 2013.

Sostiene que las vías de acceso al inmueble vienen desde el camino público o ruta A-27 a la altura del Km 1,5 y desde ahí, se accede a través de un camino privado abierto por su representado, como puede apreciarse en el plano archivado bajo el N° 71 del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica correspondiente al año 2003.

Como hecho ilícito refiere que a partir del 10 de febrero de 2017, la empresa demandada, a través de su contratista, llegó al terreno ya individualizado de su representado, a fin de proceder a realizar obras correspondientes a la instalación de tuberías y alcantarillado en el subsuelo para el curso de agua potable dirigido a la población Campo Verde desde el Sector Pago de Gómez, trabajos que asegura, se ejecutaron en la propiedad de su representado, en su deslinde este, sin su consentimiento, causando daños a su propiedad como excavaciones, ruidos molestos, instalación de cercas, el ingreso de trabajadores, el polvo levantado, sin existir acuerdo en la realización de los mismos, los tiempos y las formas, y sin que mediare indemnización alguna, ni mucho menos la constitución de una servidumbre de acueducto que autorizara estos trabajos o resolución judicial o acto de autoridad que lo dispusiere, afirmando que hasta el día de hoy, Aguas del Altiplano S.A. aprovecha el terreno de propiedad de su representado, para el curso de agua potable por medio de las tuberías instaladas debajo de su inmueble para beneficio de las población de Campo Verde, gracias a los trabajos no autorizados ni consentidos por su representado, sin que se hubiere otorgado las indemnizaciones o la constitución de una servidumbre de acueducto debida en esta clase de casos, circunstancias que alega, motivan finalmente el ejercicio de la acción de indemnización de perjuicios que deduce.

Respecto a la evaluación de los Perjuicios, reclama daño Emergente por los daños materiales causados en el inmueble a lo largo de todo el trazado por la suma de \$ 40.000.000, señalando que la extensión afectada es de 138 metros aproximadamente por trabajos a una profundidad de 1,5 a 2 metros en la instalación de una tubería de un ancho de 40 cm. aproximadamente.

Agrega que tener una infraestructura debajo de su propiedad, implica para su representado soportar gravámenes cada vez que ocurran desperfectos o sea necesaria la mantención de las tuberías, debiendo además dejar pasar al personal de Aguas del



Altiplano S.A. o a sus contratistas, para efectuar los trabajos y, en caso de una transferencia del terreno deberá venderlo con el referido gravamen, disminuyendo claramente su valor.

Como causa el daño moral alega la impotencia y molestias ocasionados a su representado por ver que la tranquilidad de su hogar y su derecho de dominio sobre el inmueble, fueran vulnerados por el proceder de Aguas del Altiplano S.A., avalúando el daño moral en la suma de \$ 15.000.000 o la que estime procedente el.

Por ultimo solicita se ordene la desinstalación de las tuberías que atraviesan el predio de su representado, puesto que afirma, se trata de una obra efectuada sin el consentimiento de este último y nada puede obligarlo a soportar un gravamen de tal naturaleza, que no tiene resolución judicial, contrato o acto administrativo válido que lo constituyera o autorizase en el sector y que fuera informado a su representado, sin que tampoco existiera indemnización concedida en su para ejecutar tal obra y se condene en costas a Aguas del Altiplano S.A.

**DUODÉCIMO:** Que el abogado Carlos Ruiz Larral, en representación de la parte demandada Aguas del Altiplano S.A., contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas alegando en síntesis lo siguiente: la existencia de inconsistencias jurídicas de la demanda; que no hay responsabilidad civil extracontractual de Aguas del Altiplano; que los daños alegados por el actor son improcedentes y por tanto no son indemnizables; la falta de legitimación activa del actor; y en subsidio, que el monto de la demanda debe ser sustancialmente reducido porque existió una exposición imprudente por parte de la víctima.

En cuanto a las inconsistencias jurídicas de la demanda, sostiene que la matriz de agua potable que une la población o comunidad Campo Verde con la Ruta A-27, data del mes de Junio de 2002, teniendo dicho camino el mismo trazado desde esa época, lo que se hizo para cumplir con el servicio público de distribución de agua potable, exigidas por la urbanización conforme a la ley, según la obligación que emana de los artículos 5°, 33° y 35° del D.F.L N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, de 1989.

En síntesis, argumenta que el actor omite deliberadamente que la instalación de la tubería de agua potable en el subsuelo del eje central del camino de uso público que une el camino público Campo Verde con el camino público A- 27 de Azapa, destinado a proveer el servicio de agua potable a la población o comunidad Campo Verde, data del mes de Junio de 2002, en adelante, y que incluso la data de la instalación de la infraestructura sanitaria en el camino de uso público es anterior a la fecha de



adquisición de la propiedad del actor, quien adquirió la propiedad por compra que le hizo a su padre, don Mario Ignacio Chang Alvarado, el año 2013.

Bajo estas circunstancias, manifiesta que el actor no tenía menos que conocer la construcción de dichas obras que datan del mes de Junio de 2002, sin que esta se hayan hecho de forma oculta, lo que resulta inverosímil, atendida la magnitud de las mismas, considerando además que los trabajos realizados durante el año 2017, lo fueron para reforzar la matriz de agua potable existente en el sector con el fin de mejorar la presión del agua que se suministra a los residentes del sector para cumplir con la normativa vigente en esta materia prescrita en la letra a), inciso primero, del artículo 11, de la Ley N° 18.902.

Como defensa negativa, niega todos y cada uno de los hechos fundantes de la misma, y no reconoce la forma en que se señala habrían sucedido los hechos, ni las responsabilidades que se le imputan a la demandada, mucho menos los valores asociados a los supuestos daños.

Luego, expone el demandado que no tiene responsabilidad civil extracontractual por cuanto asegura actuó dentro del marco legal que la regula al intervenir un camino de uso público en el reforzamiento de una tubería de agua existente en el lugar, que data del mes de Junio de 2002, y que pasa por el medio del camino a 1,5 metros y 3 metros respectivamente, cuya extensión va desde el camino público A- 27 al camino público de Campo Verde, pudiendo intervenir dicha faja de terreno, que según lo prescrito por el D.F.L. 382 del año 1988 Ley de General de Servicios Sanitarios, en su artículo N° 9 y 35 del mismo cuerpo legal .

Explica que es un hecho no discutido, que la demandada es titular de una concesión para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, siendo titular de un derecho de aprovechamiento de aguas, y la titularidad de ésta de una tubería de agua potable e instalaciones sanitarias anexas, de lo que se sigue su derecho indiscutido a disponer de las referidas aguas y llevarlas desde el camino público A-27 de Azapa, hacia la población o comunidad Campo Verde que carece de ellas, la que tiene su acceso por un camino público.

Agrega que al tratarse de agua potable, cuya necesidad para la vida y cualquier actividad humana es indispensable, tratándose de un elemento vital, de modo que el antecesor en el derecho de propiedad del Lote B-1 antes Lote B de la subdivisión del Lote N°1, y los otros propietarios de los terrenos colindantes al camino de uso público, con su mera voluntad y tolerancia permitieron desde el año 2002 a la fecha, la instalación de la tubería de agua potable que por la ley N° 18.885, “se traspasarán en



dominio, por el solo ministerio de la ley”, en este sentido, la servidumbre de acueducto tiene el carácter de legal y, en consecuencia, es obligatoria para el demandante, siendo un hecho público y notorio que el camino de uso público por el cual al actor reclama el pago de la indemnización de perjuicios es efectivamente de uso público, porque allí transitan diariamente personas, circulan vehículos de todo tipo, camiones aljibes de propiedad del actor que vende agua, desde y hacia la población Campo Verde, además de conectar dos caminos públicos la ruta A-27 de Azapa y el de Campo Verde. Máxime si la servidumbre de acueducto legal, puede constituirse partes o por confesión judicial prestada por el propietario del predio sirviente.

En cuanto al elemento de Imputabilidad o capacidad delictual, indica que el hecho atribuido por el actor no se pueda imputar a la demandada, porque tal como se dijo, el contratista de la empresa Aguas del Altiplano S.A. intervino un camino de uso público que conecta el camino A-27 con la población Campo Verde, para reforzar la infraestructura sanitaria existente en el lugar, que data del mes de Junio de 2002, a la fecha.

En cuanto a la relación de causalidad, indica que los probables daños patrimoniales ocurrieron en enero del año 2017, habiendo transcurrido más de dos años desde la ocurrencia del hecho ilícito, estando hoy la tubería de agua potable ubicada en forma subterránea en el camino de uso público, sin existir ninguna molestia para el actor, es más, afirma no existe ningún reclamo presentado ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ingresado por el actor reclamando de alguna molestia como “excavaciones, ruidos molestos, instalación de cercas, ingreso de trabajadores, polvo levantado o en la tranquilidad de su hogar, todos los cuales asegura, no existen hoy, porque estos daños también se habrían producido cuando se instaló la matriz de agua potable original que data del año 2002, sin que exista algún reclamo o demanda por este hecho, habida consideración de que en la actualidad se mantiene el mismo trazado existente, desde el mes de Junio de 2002.

En cuanto al daño material demandado señala que el argumento para demandar el daño material es inconsistente porque la instalación de la tubería de agua potable, como se dijo, data del mes de Junio de 2002, y los trabajos realizados durante el año 2017, fueron para reforzar la tubería existente en el lugar y no la instalación de una primera tubería, en consecuencia ninguna privación ha causado en la propiedad del actor, quien tiene su salida de acceso por la camino Público de Campo Verde que conecta con su Lote B-1, además es de público conocimiento que los camiones aljibes de propiedad del actor transitan normalmente por el camino de uso público.



Respecto al daño moral reclama que la pretensión de pago del actor es exorbitante, por cuanto se trata de daños estrictamente materiales, los cuales el actor intenta aumentar por la vía del daño moral, ninguno de los cuales se relaciona (ni podría hacerlo) con daño corporal.

Finalmente respecto de la falta de legitimación activa del actor, afirma que en el registro de Hipotecas y Gravámenes relativo al título de propiedad del actor, se encuentra inscrito un derecho real de usufructo en favor de don Mario Ignacio Chang Alvarado y de doña Guillermina Graciela Rivera Cerezo, padres del actor, a fojas 692 N°230 del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2013, con una data anterior a los trabajos realizados por la demandada en el año 2017 y la fecha de la presente acción, de 07 de febrero de 2019, concluyendo que por lo anterior es el usufructuario quien tiene el derecho de uso y goce y está facultado para percibir los frutos naturales y civiles que de la cosa, Agregando que en este caso, el derecho a perseguir la indemnización corresponde a los usufructuarios y no al nudo propietario, razón por la cual este último no puede deducir la presente acción.

En subsidio, solicita que el monto de la demanda debe ser sustancialmente reducido por que existió una exposición imprudente por parte de la víctima por los mismos antecedentes expuestos los que da por reproducidos, sostiene que al menos hubo una exposición imprudente al daño, precisando que al autorizar el propietario del Lote B, hoy Lote B-1, en el mes de Junio de 2002, la instalación de la tubería de matriz de agua potable que conecta por el camino de uso público la ruta A-27 con el camino público de Campo Verde, cualquier trabajo hecho fuera de su propiedad podría causar alguna molestia no sólo a él sino que a todos los dueños de los terrenos colindantes al camino, por trabajos de reparación, cambio de tubería o reforzamiento de la misma.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, a fin de acreditar los supuestos de su acción, la parte demandante, rindió la siguiente prueba

**I.- Documental:**

**En el folio 1**

- Certificado de vigencia del Conservador de Bienes Raíces Arica del Registro de Propiedad inscrito a fojas 968 N° 784 del año 2013 de fecha 30 de diciembre del año 2019.
- Plano archivado bajo el N° 71 del Archivo de Planos y Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Arica, correspondiente al año 2003.
- Minuta técnica explicativa del camino de acceso en litigio, elaborado por el ingeniero agrónomo, Carlos Valdera Medina.





En el folio

**II.- Testimonial:**

Rendida con fecha 10 de enero de 2020, en folio 64, consistente en los Atestados de don Ayu de Las Peñas Ly Lanchipa, don Amador Guillermo García Tabilo y don Pedro Beltrán Escobar Fredes.

**III.- Confesional:**

Con fecha 23 de enero de 2020, en el folio 64, el representante legal de la empresa, don Christian Barahona Rubio, absolvió de manera personal las posiciones contenidas en el pliego que se tuvo por acompañado con fecha 13 de enero de 2020, en el folio 21.

**IV.- Diligencias:**

- En el folio 130, se agregó a estos autos, el Ord N°480 de fecha 19 de marzo de 2020, remitido por don Rooney Focacci Yugo, Director Regional de Vialidad de Arica y Parinacota.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, a su vez, la parte demandada rindió la siguiente prueba:

**I.- Documental:**

En el folio 57 y 58

- Copia título de dominio de la propiedad del Lote B – Uno, de fecha 31 de mayo de 2019, inscrita a fojas 968 número 784 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2013.
- Certificado de Hipotecas y Gravámenes, Interdicciones y prohibiciones de enajenar, Litigios y Bien Familiar otorgado por el Conservador de Bienes Raíces de Arica de fecha 31 de mayo de 2019, inscrito a fojas 692 número 230 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2013.
- Copia de Certificado Memoria Explicativa Lote B de la Subdivisión Lote N°1 Predio Domingo Montalvo Valle de Azapa, de fecha 31 de mayo de 2019, inscrito con el N°71 en el Archivo de Planos y Documentos del año 2003, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Arica.
- Copia simple de certificado N°1151 de 04 de diciembre de 2003, emitido por don Francisco Zuleta Gómez, Arquitecto Director de Obras Municipales.
- Copia simple de Contrato ID 3556 Refuerzo Campo Verde, Arica celebrado entre Aguas del Altiplano con la empresa Ingeniería y Comercial Mannheim Limitada, de fecha 06 de diciembre de 2016.



- Copia simple de Condiciones Generales del Contrato ID 3556 Refuerzo Campo Verde, Arica celebrado entre Aguas del Altiplano con la empresa Ingeniería y Comercial Mannheim Limitada, de fecha 06 de diciembre de 2016.
- Copia simple de Anexos a las BAG Especificaciones Técnicas especiales refuerzo Campo Verde Arica.
- Copia simple de las Bases Administrativas Generales Licitación Privada Refuerzo Campo Verde, Arica.
- Copia simple de cinco (5) Planos de detalle de las obras denominada Refuerzo Campo Verde.

En el folio 62 y 68

- Copia simple de Plano proyecto de Subdivisión Lote B del Lote N°1 de fecha 04 de diciembre de 2003, inscrito con el N°71 en el Archivo de Planos y Documentos del año 2003, custodiado bajo el N° 43-2020.

En el folio 121

- 17 fotografías, con certificación de fecha el 27 de enero de 2020, del Notario Público de Arica, don Carlos Urbina Reszczynsky

### **II.- Testimonial:**

Rendida con fecha 10 de enero de 2020, en el folio 65, consistente en los atestados de don Luis Araya Grado y don Raúl Palma Ponce.

Rendida con fecha 10 de enero de 2020, en el folio 99, consistente en el atestado de don Juan Bolaños León.

Rendida con fecha 10 de enero de 2020, en el folio 101, consistente en el atestado de don Hugo Cabrera Vasquez.

### **III.- Confesional:**

Con fecha 22 de enero de 2020, en el folio 83, el demandante don Mario Sergio Chang Rivera, absolvió de manera personal las posiciones contenidas en el pliego que se tuvo por acompañado con fecha 13 de enero de 2020, en el folio 72.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, como medida para mejor resolver, se agregó el informe pericial ofrecido por la parte demandante, realizado por el perito Raimundo Vargas Nuñez, y el Ord N°357 de fecha 15 de junio de 2020, del Consejo de Defensa del Estado, en que dicha institución, frente al requerimiento de remitir croquis de expropiación del informe de tasación de expropiación, Resolución Fiscalía Exenta N°737, de fecha 23 de enero de 2013, correspondiente a la causa V-508-2014 de este Segundo Juzgado de Letras de Arica, informa que no cuentan con copia física ni digital



del aludido croquis de expropiación del Lote N°17 relativo al proyecto de “Reposición Obra Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel de Azapa”.

**DÉCIMO SEXTO:** Que planteada la discusión y reseñada la prueba, resulta pertinente recordar que para la procedencia de la acción contenida en el artículo 2.314 del Código Civil, se requiere que el demandante demuestre, a través de los medios de prueba legales, la existencia de un delito o cuasidelito civil, la culpabilidad del demandado en su comisión, la existencia de daño o perjuicios en la víctima y la relación de causalidad entre la acción culposa y los daños que se reclaman. En efecto, si bien el legislador exige como elemento necesario de la responsabilidad extracontractual la existencia de un hecho voluntario antijurídico, además establece que dicha conducta debe causar efectivamente un daño y en consecuencia, para que surja la responsabilidad civil, deben verificarse cada uno de estos elementos de modo que, la omisión de cualquiera de ellos, deviene en el rechazo de la acción.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** precisado lo anterior, del análisis de los escritos fundamentales y de la prueba rendida, especialmente de la prueba documental y pericial, se pueden inferir como hechos los siguientes.

1- Que el demandante es poseedor regular del predio denominado Lote B-1, de la subdivisión del lote B, de la subdivisión del Lote N° 1, del predio agrícola ubicado en el Valle de Azapa, Km. 1.5 de Arica, el cual se encuentra inscrito a su nombre a fojas 968, n°783, año 2013, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, predio que adquirió por compra que hizo el año 2013, a don Mario Ignacio Chang Alvarado.

2- Que la demandada es titular de una concesión para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y en el ejercicio de esta concesión, a lo menos desde el año 2003, ha trasladado aguas a través de dos cañerías subterráneas que vienen desde el camino público ruta A-27 de Azapa, atraviesan el costado este del predio del demandado, en dirección noreste, por una extensión aproximada de 140 metros lineales y a una profundidad de 1 metro y 30 centímetros, sin que exista servidumbre constituida o autorización expresa del dueño del predio.

3- Que el terreno que atraviesa ambos ductos subterráneos, corresponde a una franja de tierra que es utilizado como vía pública de acceso y salida de los habitantes del sector Campo Verde de esta ciudad y se trata de una calle de tierra que permite el tránsito continuo de personas y vehículos.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, conforme a los hechos establecidos precedentemente, es evidente que la instalación de un ducto por parte de la demandada, sin la



autorización del dueño o de la justicia en subsidio, constituye un hecho ilícito atribuible a lo menos, a la culpa o negligencia de la demandada, parte que como se dijo, siendo experta en el rubro, instaló una tubería en suelo ajeno, sin autorización de su propietario.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, dicho lo anterior, la contienda se centra claramente, en la existencia de una consecuencia dañina que pueda ser atribuida de manera directa a la existencia de las tuberías en el terreno del demandante o a las obras que precedieron su instalación o como consecuencia de sus reparaciones, teniendo presente sobre el particular, que la parte demandante reclama daños materiales causados en el inmueble a lo largo de todo el trazado y por la carga que para él implica, soportar gravámenes como los generados por desperfectos, mantención de las tuberías, tránsito de personal de la empresa demandada o de sus contratistas y, por la pérdida de valor de su terreno, demandando finalmente daño moral, el que según refiere, se configuraría por la impotencia y molestias ocasionadas a su representado, con ocasión de la instalación y existencia de la cañería.

**VIGÉSIMO:** Que, la existencia de los daños y su cuantía, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.698 del Código Civil, debe ser establecida por aquel que los alega, en este caso el demandante, sin embargo dicha parte, mayormente rindió prueba en orden a establecer la titularidad sobre el predio afectado y sobre la existencia de las tuberías instaladas por la demandada en su interior, sin centrarse de manera específica en la existencia y certeza de los daños que reclama.

En este plano del análisis, debe dejarse precisarse que no basta la mera afirmación de existencia de los daños para la procedencia de la indemnización, por cuanto ellos, como se dijo, deben ser reales y efectivos y por tanto, deben ser establecidos y probados en el proceso por aquella parte que dice haberlos sufrido.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que en el contexto establecido en los motivos que anteceden, estima este sentenciador que la prueba que rindió el demandante, valorada de la forma dispuesta por la ley, no permite adquirir certeza de que el hecho ilícito atribuido a la demandada efectivamente le provocó al actor los daños materiales y morales que reclama, puesto que, aquella que es pertinente para dicho efecto, esto es, la testimonial y pericial, carece de precisión, en el caso de la primera y, solo contiene una apreciación formal del perito relativa a la pérdida de valor del predio, sin considerar el uso actual del terreno afectado como vía pública y la minus valía que dicho destino trae consigo, en el caso de la segunda.

A mayor abundamiento, que la parte del terreno del demandante sea una franja destinada desde antaño, al tránsito público de personas y vehículos de todo tipo y la



circunstancia de este tramo, esté separada de la parte restante del terreno del demandante, por un cerco, como se muestra en el peritaje, descarta la posibilidad de que el actor sufra molestias por invasión de su privacidad y deviene en la irrelevancia de la existencia de polvo o ruido producido por la presencia de personas o vehículos y por tránsito o por trabajos en esa parte del predio del actor, ya que el eventual ingreso de personas y la generación de polvo o ruidos, no crea una situación especial o distinta a la que produce el constante paso de vehículos y transeúntes por ese lugar y, son a consecuencias normales e inevitables de la existencia de aludida vía en esa parte del predio del actor.

Concordante, el hecho de que el lugar afectado por la instalación del ducto, se encuentre separado del resto del predio del actor y que este siendo permanentemente utilizado como vía pública de tránsito de personas y vehículos, demuestra que el aludido espacio, no está siendo habitado por el demandante, ni utilizado comercialmente o para labores agrícolas y por tanto, no es un espacio que genere ganancias para su dueño y por tal motivo, el emplazamiento de una tubería en el subsuelo de ese lugar, no importa por sí misma, alguna pérdida de valía o alguna disminución del precio de mercado del predio total, como lo afirma el demandante y el perito y, reafirman la conclusión de que el daño reclamado, no ha sido establecido procesalmente y por tanto, desde el punto de vista civil, no puede haber responsabilidad extracontractual del demandado, por faltar el daño efectivo, para su integra configuración.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que así las cosas, descansando la pretensión indemnizatoria del actor sobre la base de daños cuya existencia no probó, la demanda será rechazada, no obstante, dicha parte no será condenada en costas, por estimar este sentenciador que el motivo para demandar, ha sido justificado.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Finalmente, en cuanto a la petición de retiro de las tuberías, estima este Juez que además de ser una petición ajena a la finalidad indemnizatoria de la demanda deducida, el beneficio público de la obra ejecutada por el demandado, especialmente para los habitantes del sector campo verde de esta ciudad, que no han sido demandados, impiden también acceder a ella, considerando también para su rechazo, que una decisión como la que solicita el demandante, ningún fin reparatorio consigue y solo causaría perjuicios para la comunidad.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, habiendose rechazado la demanda sobre las consideraciones ya reseñadas, se omitirá el análisis respecto de las restantes defensas de la demandada y de la restante prueba rendida por el actor, en el primer caso por resultar innecesario y en el segundo, por ser dicha prueba irrelevante.



Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254, 341, 342, 384, 399, y 425, del Código de Procedimiento Civil, y 1.698 y siguientes del Código Civil, se resuelve:

**I.-** Que, se rechaza la objeción documental, deducida con fecha 11 de enero de 2020, en el folio 66, por el apoderado de la parte demandada.

**II.-** Que, se rechazan las tachas deducidas por la parte demandada con fecha 10 de enero de 2020, en el folio 64, en contra de los testigos Amador Guillermo García Tabilo y Pedro Beltrán Escobar Fredes y por la parte demandante con fecha 10 de enero de 2020, en el folio 65, en contra del testigo Raúl Ernesto Palma Ponce.

**III.-** Que, se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios, deducida con fecha 07 de febrero de 2020, en el folio 1, por don Mario Sergio Chang Rivera, en contra de Aguas del Altiplano S.A.

**IV.-** Que no se condena en costas a la parte demandante.

Anótese, regístrese, notifíquese por cédula y archívese si no se apelare

**Rol N° C-293-2019**

Dictada por don Gonzalo Roberto Quiroz Espinoza, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica. Autoriza doña María Georgina Aguirre Godoy, Secretaria Subrogante.

**CERTIFICO:** Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. - Arica, seis de agosto de dos mil veinte

